

MALÍ: DERIVA AUTORITARIA, VIOLENCIA GENERALIZADA Y ACERCAMIENTO A MOSCÚ

La Unión Europea debe recuperar la cooperación con el Sahel Occidental para evitar el colapso de una región prioritaria para la seguridad y desarrollo de África y Europa

DESDE hace más de una década, Malí está atrapado en una crisis política, social y de seguridad que, lejos de apaciguarse, se ha agravado aún más con el regreso de los militares al poder, hace ahora cinco años. En 2012, la rebelión *tuareg* en el norte y la proclamación del Azawad como territorio independiente hicieron visible la profunda fractura entre la capital, Bamako, y unas regiones septentrionales históricamente alejadas del poder central. Esta asonada rebelde fue pronto secuestrada por los grupos yihadistas, que pusieron al Estado al borde del colapso. Malí —reconocida hasta entonces como la democracia más estable y solvente de África— se convirtió en uno de los principales focos de inestabilidad del Sahel; y, al tiempo, en una amenaza creciente para toda la comunidad internacional, más en concreto para Europa, con la consolidación de un santuario yihadista en su flanco sur inmediato.

La progresiva intervención internacional —especialmente de Francia, Naciones Unidas y la Unión Europea— evitó que el país colapsara frente a la eclosión de la violencia armada, pero apenas consiguió cerrar las heridas que alimentaban el conflicto y, más importante aún, tampoco sirvió para fortalecer unas instituciones estatales capaces de sustentar la go-

bernanza, la seguridad y el desarrollo de la población maliense. Durante los años siguientes, los gobiernos surgidos de las urnas fueron incapaces de recuperar la soberanía nacional, contener la expansión de la violencia o enfrentar la grave crisis económica.

En este contexto, la frustración y la desesperación social fueron las razones que enarbolaron los golpistas militares para derrocar al presidente Ibrahim Boubacar Keita en agosto de 2020 y, tan solo nueve meses después, aniquilar al gobierno de transición de Bah N'Daw. Así, Assimi Goïta asumió definitivamente las riendas del país, con la promesa de devolver la democracia y la seguridad bajo la autoridad de un régimen militar.

Desde entonces, Bamako ha emprendido un nuevo rumbo: ruptura con sus antiguos aliados de Occidente, progresivo aislamiento regional y acercamiento a Rusia. Mientras, la violencia se extiende y adquiere nuevas formas, cada vez más organizadas y letales. Hoy, la promesa de los militares se enfrenta a una realidad cada vez más compleja, con una

sociedad dividida entre la esperanza, el desencanto y la resistencia. Y, frente al continente africano, una Unión Europea que debe decidir cómo relacionarse con un régimen autoritario, cuyo principal objetivo es su propia supervivencia y que ha convertido la confrontación en el pilar más cruel de su estrategia.

RÉGIMEN MILITAR

Tras la irrupción del coronel Assimi Goïta en la presidencia de Malí —por designación de la Corte Constitucional y ya ascendido a general— el 21 de mayo de 2021, la distancia entre la justificación pública del golpe —corrupción, inseguridad y deterioro de la legitimidad política— y las razones reales para tomar el poder se han hecho cada vez más evidentes. Muy pronto, las promesas de retorno a la democracia se fueron aplazando, mientras la junta militar ampliaba el período de transición. En mayo de 2025, quedó patente su deriva autoritaria, con la disolución de los partidos políticos; la persecución sistemática de todos los opositores al régimen: políticos, militares y periodistas; y la supresión de las libertades más fundamentales de los ciudadanos.

Esta situación provocó la primera gran oleada de protestas en Bamako y otras ciudades del país, que exigían al gobierno, a través de un comunicado conjunto, «un



El Ejército de Malí patrulla una calle en el centro del país.

rápido y creíble retorno al orden constitucional mediante la organización de elecciones transparentes, inclusivas y pacíficas».

A pesar del malestar social, también creciente en el seno del estamento militar, nada ha hecho cambiar al presidente Goïta, que sigue convencido de su capacidad para devolver la seguridad y estabilidad al país, como proclama desde 2020, y no muestra intención alguna de abandonar el poder.

Hasta ahora, la junta militar ha construido su legitimidad sobre una idea: Malí no necesitaba tutelas extranjeras, sino un Estado fuerte capaz de decidir por sí mismo, garantizar su integridad territorial y proteger a su población.

Con ese objetivo, expulsó a las fuerzas francesas, solicitó la retirada de la misión de Naciones Unidas (MINUSMA) y, por último, resolvió la presencia de las dos misiones de la Unión Europea: EUTM Malí y EUCAP Malí.

Además, y en el marco de su pretendido aislamiento internacional, canceló su membresía de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO), junto con Burkina Faso y Níger. También juntos decidieron romper la coalición G5 Sahel (Malí, Burkina Faso, Níger, Chad y Mauritania), que —con un importante apoyo político y económico de Occidente, liderado por la Unión Africana

La UE debe decidir cómo relacionarse con un régimen autoritario, cuyo principal objetivo es su supervivencia

y Naciones Unidas— se fundó en 2014 para coordinar la cooperación regional en políticas de desarrollo y asuntos de seguridad —en especial, la lucha contra el yihadismo— en África Occidental. Sin duda, la salida de los antiguos aliados dejó un vacío de seguridad para muchas zonas rurales del país, pero también eliminó capacidades logísticas, de inteligencia y asesoramiento muy difíciles de sustituir en la lucha contra la amenaza yihadista.

Como contrapartida, las tres juntas militares de los países crearon la Alianza de Estados del Sahel (AES), cuya pretensión era resolver los problemas comunes con sus propios medios y sin interferencia ni internacional ni africana.

Sobre el papel, la AES —que también cuenta con una fuerza militar conjunta formada por 5.000 militares y con base en Niamey (Níger)— ofrece una amplia plataforma de solidaridad, pero la realidad es que no ha sido capaz de resolver

Refugiados repatriados caminan por Tombuktú, una histórica ciudad del norte de Malí.



Nicolas Remene/EEF

su problema fundamental: acabar con el terror yihadista que cruza las fronteras nacionales con total impunidad.

RUSIA: EL GRAN ALIADO

En nombre de su soberanía, Bamako ha reducido sus vínculos con buena parte de Occidente, mientras que, paradójicamente, ha forjado unas estrechas relaciones con Rusia, su ahora gran aliado exterior. Desde su ascenso al poder, la junta militar de Goïta buscó en Moscú un socio que no condicionara su apoyo al regreso de un gobierno civil. La cooperación bilateral comenzó con la llegada a Malí, a finales de 2021, del controvertido *Grupo Wagner*, posteriormente reconvertido en *Africa Corps* (2024) bajo la autoridad formal del Kremlin. Desde entonces, más de un millar de mercenarios rusos han desplegado en distintas bases para luchar, junto con el Ejército maliense, contra los grupos yihadistas y rebeldes.

Además, Moscú ha proporcionado armamento, aeronaves, drones y asesoría

militar a Malí —también a Burkina Faso y Níger—, y está utilizando esta alianza como pilar de su política expansionista en África. Todo ello con la implicación directa del presidente Putin, que, en una conversación telefónica con Goïta el pasado mes de agosto, se comprometió a mantener su apoyo militar contra la amenaza yihadista; y, también, a «desarrollar activamente el diálogo político y los contactos a diversos niveles, además de promover una mayor expansión de la cooperación

Bamako ha reducido sus vínculos con buena parte de Occidente y ha forjado estrechas relaciones con Rusia

mutuamente beneficiosa en los ámbitos comercial, económico y humanitario».

En el marco de este apoyo militar de Rusia, la actuación de su *Africa Corps* acumula graves acusaciones de abusos y violación de derechos humanos contra la población civil, como denuncia Naciones Unidas en numerosos informes. A pesar de ello, según el *Afrobarometer* de noviembre de 2025, la presencia rusa todavía cuenta con un apoyo social considerable en Malí, algo que encaja con un discurso muy extendido —y multiplicado por numerosas campañas rusas de desinformación, como acredita el *Africa Center for Strategic Studies*— que presenta a Rusia como un socio respetable y una alternativa a Francia, cuya influencia es ampliamente rechazada por la población.

Con todo, sobre el terreno, la relación con Moscú ha contribuido a reforzar al régimen militar, hasta convertirse —como ha ocurrido en Níger tras la intentona golpista de finales de agosto— en una especie de guardia pretoriana de las juntas

La amenaza yihadista no solo se ha mantenido, sino que ha aumentado su poder territorial y económico

militares. Sin embargo, resulta mucho menos convincente que Rusia y sus mercenarios de *Africa Corps* puedan ser la solución definitiva al problema de la seguridad que está destrozando Malí y toda la región del Sahel Occidental. Las fuerzas malienses, apoyadas por contingentes rusos, han obtenido éxitos puntuales — como la recuperación de Kidal en 2023 —, pero también acumulan sonoras derrotas hasta nuestros días, en las que han muerto decenas de mercenarios rusos. Hoy, la violencia yihadista continúa siendo elevada, mientras que otros grupos rebeldes conservan una significativa capacidad para atacar al Estado y controlar amplias zonas rurales, sobre todo en el norte del país. Y todo ello sin olvidar que las medidas en el ámbito de la seguridad nunca resolverán el problema, a no ser que, de forma paralela, se articulen políticas que incrementen la gobernanza, las expectativas de vida y el desarrollo integral de la población y el territorio.

YIHADISMO Y REBELDÍA TUAREG

Sin duda, la evolución de la seguridad dista mucho de las promesas de Goïta tras su ascenso ilícito al poder en 2020. La amenaza yihadista no solo se ha mantenido, sino que ha aumentado su poder territorial y económico —gracias a su vinculación con el crimen organizado, oxígeno financiero del terrorismo en la región—, y también ha crecido la presión que ejerce sobre las instituciones del Estado, principalmente su Ejército. Los dos principales actores del entramado terrorista en el Sahel Occidental—la coalición yihadista *Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes* (JNIM), vinculado a *Al Qaeda* y predominante en Malí; y el Estado Islámico del Sahel, filial de *Daesh* y con mayor presencia en Níger— siguen mostrando una gran capacidad de aterrorizar a la población, sobre la que ejercen un poder cada vez más absoluto, así como de repeler los ataques de las fuerzas malienses de seguridad y sus aliados rusos.

En septiembre de 2024, el JNIM lanzó una potente ofensiva —con más de 70 muertos— sobre un centro de formación de la gendarmería y el aeropuerto militar

en Bamako, demostraron así que la capital estaba dentro de su alcance. Poco después, ya en 2025, el JNIM inició una campaña de bloqueo de carreteras y emboscadas a convoyes de combustible procedentes de Senegal y Costa de Marfil, que llegó a provocar graves problemas de abastecimiento en Bamako y

otras zonas del país. En junio, una nueva oleada de ataques en Malí, Níger y Burkina Faso dejó un balance de al menos 300 muertos, principalmente militares, en pocas semanas.

Finalmente, en 2026, la deriva violenta se ha tornado mucho más peligrosa y cruenta. El JNIM y el *Frente de Liberación*



Rebeldes del grupo independentista tuareg *Movimiento Nacional de Liberación de Azawad*.

Tanya Bindra/EFE

de Azawad (FLA), el grupo tuareg que lideró la rebelión en 2012, han sellado una excepcional e interesada alianza basada en la lucha contra su enemigo común: la junta militar de Bamako y su aliado ruso, además de anteponer la aplicación de la ley islámica (*sharia*) en todo el país, objetivo final del JNIM, frente a los propios anhelos independistas del FLA. Entre el 24 y 26 de abril, lanzaron una ofensiva simultánea y fuertemente coordinada sobre Bamako, Kati, Gao, Kidal, Sevaré, Mopti y Bourem —separadas por más de 1.500 kilómetros— con ataques suicidas con coches bomba suicidas, emboscadas y operaciones de asalto.

Tras este ataque, la nueva coalición ha reivindicado distintos atentados —además de hacer rehenes a centenares de soldados— y mantiene un bloqueo parcial sobre la capital; mientras que el Ejército de Malí, respaldado por los milicianos rusos, afirma que juntos han recuperado el control en todas las localidades que fueron atacadas. Más allá de estas proclamas, tanta violencia cruzada ha dejado un balance dramático de víctimas, que es la evidencia más clara de la grave amenaza que enfrenta el país y, por extensión, toda la región saheliana, que además ya está muy presente en los países del Golfo de Guinea.

Según el *Africa Center for Strategic Studies*, Malí ha registrado más de 17.700 muertes vinculadas a la violencia yihadista desde finales de la década de 2000, de las cuales el 81 por 100 (14.384) se produjeron desde 2020. Además, los ataques a distancia atribuidos a JNIM —especialmente con drones armados— se han incrementado de forma exponencial en los últimos dos años: un claro ejemplo de la creciente letalidad y complejidad de sus campañas de terror. En 2026, los datos proporcionados por el *Armed Conflict Location and Event Data* (ACLED) certifican que la situación sigue empeorando en Malí: «las muertes por ataques de militantes aumentaron un 35 por 100 hasta 3.435 en los primeros siete meses de este año, en comparación con 2.546 en el mismo periodo de 2024».

UNIÓN EUROPEA Y SAHEL OCCIDENTAL

Frente a este panorama, es necesario que la Unión Europea (UE) recupere —sin desestimar la dificultad que supone dialogar con las actuales juntas militares— su cooperación con este país central del Sahel Occidental, una región que lamentablemente se ha consolidado —en el inmediato sur de Europa— como el epicentro del yihadismo internacional. Para la UE

con la estrategia de 2021, sino de una recalibración pragmática de la política europea ante el fracaso de buena parte de los instrumentos anteriores, los golpes de Estado y la creciente competencia geopolítica en la región, marcada por la omnipresencia de Rusia. Un giro estratégico que se sustenta en una conclusión muy clara: «desvincularse no es una opción», pero que —como ya advertía Josep Borrell, anterior Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en 2023— exige «repensar la manera en la que estamos. Cómo estamos, para qué estamos y con qué recursos».

Hacia el futuro, la UE —con el apoyo firme de España— apuesta por una política más flexible, pragmática y diferenciada, que se adapte a las características y necesidades de cada país. Un enfoque que se articula en torno a tres prioridades: el compromiso político y diplomático, la promoción de la seguridad humana y el fortalecimiento de la cohesión social y, por último, las oportunidades económicas. De esta forma, la UE debe mantener canales de diálogo incluso con gobiernos con los que existen importantes discrepancias políticas, al tiempo que refuerza su defensa de los derechos humanos, el Estado de derecho y los principios democráticos. Asimismo, busca reforzar su presencia mediante la ayuda humanitaria y la cooperación económica, además de fortalecer su apoyo en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la desinformación.

Hoy, el devenir de Malí —y, por extensión, en los tres países de la Alianza de Estados del Sahel— sigue siendo extremadamente incierto, y nada indica que esta situación pueda revertirse en un breve plazo. Mientras tanto, la población seguirá sufriendo una crisis multidimensional de desgobierno, inseguridad y subdesarrollo. Ante esta realidad, es imprescindible que la UE colabore en la articulación de medidas políticas, sociales y de seguridad que permitan vislumbrar un futuro en paz y estabilidad para esta región y, por ende, para Europa.



El presidente de transición de Malí, coronel Assimi Goita, durante su ceremonia de juramento en Bamako.

y para España, la estabilidad de esta región es imprescindible para garantizar la seguridad y el desarrollo dentro de sus fronteras, y esta evidencia debe estar muy presente en una nueva política hacia Malí, Burkina Faso y Níger, que conduzca a restaurar las relaciones con Occidente y a favorecer el regreso progresivo de los regímenes democráticos a la región.

Estos parámetros subyacen en el nuevo enfoque de la UE hacia el Sahel, que fue validado por el Consejo de Asuntos Exteriores el 20 de noviembre de 2025. En realidad, no se trata de una ruptura